

TITULO: Agenda Ciudadana/ El **Presidente** y su **discurso**

FECHA: Jueves, 7 Mayo 1998

Lorenzo Meyer

Descodificar

El discurso de quien tiene la responsabilidad de dirigir un sistema político -el del jefe de la tribu, del emperador, del rey, del primer ministro o del Presidente- es siempre una clave para entender tanto la correlación de fuerzas como la naturaleza del conflicto, los objetivos y las estrategias del actor central del eterno drama de la lucha por el poder. Ahora bien, ningún lenguaje político de esa importancia debe tomarse en sentido literal, pues se corre el peligro de no comprender nada o de actuar bajo supuestos equivocados. Cualquier profesional de la política sabe bien que el lenguaje de las alturas debe escucharse pero luego descifrarse para poderlo entender, tarea no siempre fácil, pues nadie tiene un diccionario exacto de los varios significados de la locución del poder.

La descodificación del discurso político no es una ciencia exacta, sino un arte, donde la sensibilidad, la experiencia y el conocimiento, deben combinarse para disminuir las posibilidades de error. Lo anterior es válido en cualquier tiempo y lugar, y desde luego en México, aunque en la actualidad ese ejercicio de traducción es un poco menos complicado que en el pasado, porque quienes hoy están al frente de las grandes instituciones públicas, empezando por la Presidencia, son más obvios que sus predecesores.

El país de Alicia

En México, y desde épocas anteriores a la actual, el lenguaje del poder es similar al empleado por la reina en Alicia en el País de las Maravillas: un término puede tener tantos significados como los que en cada caso particular quiera darle el personaje que ejerce el poder. Es por ello que el gran líder siempre debe de ser traducido, aunque a fin de cuentas nadie, salvo él mismo, sabe exactamente el significado de sus palabras. Pero no sigamos discutiendo en abstracto y tomemos un par cualquiera de ejemplos históricos.

Cuando en septiembre de 1928, y tras el asesinato de Alvaro Obregón, Presidente electo y caudillo indiscutible, el Presidente saliente, Plutarco Elías Calles, informó a la nación que

el país acababa de cerrar la época de los hombres indispensables y abrir la de las instituciones. Hoy sabemos que el sonorese tenía en mente algo bastante alejado del significado literal de su declaración. Lo que realmente quiso decir el Presidente fue que, por un tiempo indefinido, él -Calles-, a pesar de estar a punto de concluir su mandato formal, se proponía seguir ejerciendo un enorme poder personal y no institucional (no sería ex Presidente sino "Jefe Máximo"), aunque, a la vez, estaba dispuesto a iniciar la construcción de una institución peculiar, un partido de Estado (el PNR), para que en un futuro indeterminado, ese partido llenase el espacio que por tanto tiempo habían ocupado caudillos como él, como Calles.

Otro ejemplo, entre centenas de posibles, lo tenemos cuando en 1971 y tras la matanza de estudiantes del "jueves de corpus" en la capital del país, el entonces presidente Luis Echeverría, declaró ante los medios, que: I) su gobierno se comprometía a llevar al cabo una investigación en torno a la responsabilidad por el brutal asesinato colectivo cometido y II) castigar con todo rigor a los culpables. Finalmente, lo que Echeverría quiso decir fue que no se investigaría a los miembros del grupo paramilitar de los "halcones" que habían asesinado a los estudiantes, ni menos a sus jefes directos e indirectos, sino que simplemente se buscaría un chivo expiatorio -finalmente fue el regente de la época, Alfonso Martínez Domínguez-, éste debería renunciar pero no se le seguiría ningún proceso y al cabo de un tiempo prudente sería gobernador de Nuevo León y más tarde senador, y que finalmente todo seguiría igual. El discurso que se contradijo con la realidad, fue la manera en que el antiguo secretario de Gobernación convertido en Presidente, hizo saber que si bien había concluido el gobierno de Díaz Ordaz, los términos de la relación del gobierno con sus críticos en las calles seguían siendo los establecidos el rojo 2 de octubre del 68.

Los Ejemplos de Hoy

En el gobierno actual hay multitud de ejemplos que muestran que el discurso presidencial debe traducirse para poder ser entendido. Uno de los más recientes tuvo lugar el 28 de abril en Chiapas. Ahí, Ernesto Zedillo, tras pedir que "lo escuche todo el mundo", dijo: "con frecuencia pareciera ser que... la apuesta es a que se pierda la calma y entonces se busque la solución fácil, pero inexistente, pero engañosa, de acudir a la fuerza, a la represión y a la

violencia; y quiero subrayar que nunca, al menos durante mi mandato como Presidente de la República, optaremos por ese camino". En otros momentos, el Presidente señaló: "Entre mexicanos no puede haber derrotados ni vencedores", "nunca el Gobierno de la República acudirá a la represión de hermanos indígenas", y más cosas del mismo estilo.

En principio, esas expresiones presidenciales resultan razonables y alentadoras. Sin embargo, la experiencia nos exige no dejarnos llevar por el optimismo e iniciar de inmediato la descodificación del mensaje. Para empezar, está el contexto, los antecedentes: la matanza de indígenas por paramilitares en diciembre pasado, la reestructuración de la Secretaría de Gobernación (donde antiguos radicales maoístas son nombrados asesores en materia de contrainsurgencia), la desacreditación por parte del gobierno de la Comisión Nacional de Intermediación y el congelamiento del proyecto de ley sobre autonomía indígena enviado sin consenso al Congreso por el Poder Ejecutivo. Finalmente, está el hecho que dos semanas antes del discurso, en la comunidad de Taniperla, se había llevado a cabo, con apoyo masivo del Ejército, la policía estatal, la Procuraduría General de la República, las autoridades de migración y activistas del PRI, la destrucción física y política del primero de los 32 llamados "municipios autónomos" que por tres años han funcionado en la zona de influencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Con ese trasfondo, el discurso presidencial del 28 de abril exigía ser sometido a la prueba de los hechos. Y esta prueba vino casi de inmediato. En efecto, apenas unos días después de que Ernesto Zedillo ofreciera no usar la fuerza, no buscar dividir a los mexicanos entre vencedores y vencidos, etcétera, un contingente de mil hombres, similar en todo al que destruyó el "municipio autónomo" en Taniperla, ocupó el ejido Amparo Agua Tinta una madrugada del inicio de mayo para llevar a cabo la misma tarea que en Taniperla. El operativo de cinco horas fue, de nuevo, violento, intimidador, humillante y destructivo de la propiedad de aquellos indígenas a los que miembros del PRI señalaban como simpatizantes del EZLN (El Universal, y La Jornada, 2 de mayo). Los ocupantes se retiraron llevándose a 53 indígenas prisioneros y dejando un claro mensaje para los 30 ayuntamientos rebeldes restantes. La dirigencia del municipio rebelde ocupado -ocho personas- ya está en la cárcel y ahí puede pasar un buen tiempo, acusada de rebelión, asociación delictuosa, privación ilegal de la libertad, usurpación de funciones, etcétera. El resto de los detenidos debió ser

puesto en libertad porque, finalmente, quienes les detuvieron no pudieron presentar pruebas en su contra, pero al volver a su devastada comunidad, ya tenían algo nuevo: "evidentes huellas de tortura", según el corresponsal de Reforma (4 de mayo).

Inmediatamente después de la acción conjunta de autoridades federales y locales en Agua Tinta, el 4 de mayo, el gobernador provisional, Roberto Albores Guillén, se apersonó en el lugar y declaró su propósito de seguir adelante con la labor de "liberar" y "para siempre" a los chiapanecos de "autoridades espurias"; es decir, se comprometió a disolver los municipios rebeldes que aún sobreviven. Su lenguaje fue duro, de combate. "¡Esto (de los municipios autónomos) se acabó... ya basta! Vamos a hacer soberano a Chiapas" (La Jornada, 5 de mayo).

Cuando un gobernador priísta, especialmente uno que no fue electo sino designado por el poder central, habla con dureza y agudiza un conflicto, no lo hace por sí mismo, sino como representante y operador de quien lo colocó en esa posición de poder: el presidente de la República. En realidad, Albores está haciendo para el país una traducción casi simultánea de lo que Ernesto Zedillo dijera unos días antes en San Cristóbal de las Casas en torno al complejo conflicto chiapaneco.

Finalmente, todo permite suponer que operativos similares a los de Taniperla y Agua Tinta se repetirán en otros o en todos los municipios rebeldes que aún existen. En respuesta, el EZLN advirtió que defenderá a lo que queda de las comunidades autónomas. Si ése es el caso, lo que realmente habría significado lo dicho por el Presidente el 28 de abril, es que, por ahora, él y sus consejeros en las secretarías de Gobernación y Defensa, han vuelto a desechar un tipo de solución violenta al problema planteado por el EZLN: la de Acteal o la del ataque directo a las posiciones del pequeño ejército de indígenas rebeldes, pero no otras, como por ejemplo, la de usar altas concentraciones de soldados y policías para devolver a los simpatizantes del PRI el control de las comunidades que perdieron a raíz del levantamiento de 1994.

La superioridad militar del gobierno puede llevarle a tener éxito inmediato en este empeño, aunque eso no significa que se resolverá el problema que llevó a la rebelión del EZLN y, desde luego, hay un riesgo alto de confrontación directa con la pequeña pero real fuerza

militar del EZLN. En cualquier caso, conviene recordar que el tipo de operaciones que el gobierno efectuó en Taniperla y Agua Tinta, no es nuevo. Cualquiera que lea lo publicado sobre Chiapas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en los pocos años que llevaba de operar antes del 1o. de enero de 1994, encontrará descripciones de la toma de comunidades indígenas por fuerzas combinadas del Ejército y policía o sólo de policías, muy similares a las que tienen lugar en la actualidad. El objetivo no era entonces la destrucción de municipios autónomos -el EZLN no había hecho su aparición pública- sino conflictos por tierras. El método de la saturación de una comunidad con fuerzas del gobierno y la captura de dirigentes indígenas descontentos con la autoridad no es nuevo, como tampoco lo es el fondo social del problema.

Las bases legales del gobierno federal y local para usar la fuerza a fin de destruir a los ayuntamientos alternativos o rebeldes, pueden ser adecuadas y suficientes, aunque uno se pregunta si era indispensable esa entrada a saco a las casas de familias señaladas como simpatizantes del zapatismo, esa humillación de los sospechosos, el robo de unas pertenencias que en esos lugares no son muchas. Sin embargo, a estas alturas del proceso de descomposición chiapaneco -y en menor medida del sistema político mexicano en su conjunto- el problema no es ya de legalidad formal sino de justicia sustantiva.

Originalmente, y tras el fracaso de la captura del subcomandante Marcos, el gobierno de Ernesto Zedillo confió en que el tiempo y el aislamiento del conflicto chiapaneco por la vía de un costoso cerco militar -costoso en términos económicos y políticos, pues a nivel nacional desequilibra la tradicional relación entre el poder civil y militar- resolvería el problema. Ahora que el gobierno ya entró en la segunda y última etapa de su mandato con el problema igual o peor que antes, cuando la lucha interna por la sucesión dentro del PRI ya se ha desatado, el Presidente y sus asesores decidieron cambiar de enfoque en relación a Chiapas y acelerar el proceso por medio del cual la autoridad central desgaste a las bases sociales del EZLN y vuelva a tener el control político de ese estado fronterizo. Eso, y no el discurso presidencial, es lo que explica las nuevas modalidades de la guerra de baja intensidad que se está desarrollando en Chiapas.